

22ª SESION ORDINARIA DEL 14 DE JULIO DE 1858

Presidencia del Sr. Luque

PRESIDENTE
RODRIGUEZ
DIAZ RODRIGUEZ
GARZON
GRAZ
FEIJOO
GARCIA
GORDILLO (D. V.)
GORDILLO (D. José.)
VALLE
GUTIERREZ
OCAMPO
FUNES
DURAN
LOPEZ (D. RICARDO)
DARACT
LUCERO
FERREIRA
ZUVIRIA
GONZALEZ
QUESADA
PARDO
COLODRERO
WARCALDE
CHENAUT
POSSE (D. F.)
ALVEAR
NAVARRO
LOPEZ (D. TIBURCIO)
SORIA

En el Paraná, Capital Provisoria de la Confederacion Argentina, á catorce dias del mes de Julio de 1858, reunidos en su Sala de Sesiones los señores Diputados anotados al márgen con inasistencia de los señores Comas y Condarco con aviso, Victorica y Posse (Don Justiniano) sin él, el señor Presidente declaró abierta la sesion.

El Secretario dió cuenta de no estar concluida el acta de la anterior.

El señor Presidente expuso: que el señor Ministro de Relaciones Exteriores habia respondido que por hallarse en cama no podia asistir á la sesion presente para satisfacer la invitacion que se le habia hecho al objeto de que diese algunas explicaciones sobre la permanencia de una fuerza paraguaya en la «Tranquera de Loreto», territorio de Corrientes.

Inmediatamente continuó la discusion del artículo 2º de la ley de Justicia Federal, suspendida en la sesion anterior.

El señor Araoz dijo: Sírvase leer el señor Secretario el artículo que se discute y el 97 de la Constitucion, y leídos que fueron, continuó: Se vé que la oposicion hecha al artículo en discusion consiste en que á juicio de los opositores se confiere á la Corte Suprema una atribucion que, ó no la tiene por la Carta, ó que no debe dársele porque no conviene, es decir, que esa oposicion se reduce á impugnar la última parte del artículo que prescribe que la Justicia Federal procederá con arreglo á la Constitucion y las leyes nacionales *que estén en conformidad con ella*. La cuestion, pues, viene á reducirse simplemente á si la Corte Suprema tiene ó debe tener ó no la atribucion que quiere conferírsele, es decir, si puede interpretar ó no las leyes y la Constitucion cuando las primeras ofrecen duda.

Si es cierto que la Corte Suprema es la única autoridad, el único Tribunal que puede interpretar las leyes, es lógico, señor, que debe tener la atribucion que se le confiere por el artículo, es decir, que ella entonces podrá ó no podrá, segun el juicio que forme, aplicar ó no las leyes que dicte el Congreso; es decir, interpretarlas, examinarlas y aplicarlas en los casos particulares, ó desentenderse de ellas cuando crean que se oponen á las prescripciones de la Constitucion, y aplicar estas en vez de aquellas.

Como se vé por el artículo 97 leído, en el

cual están consignadas las atribuciones de la Justicia Federal como tercer poder público de la Confederación «puede conocer y decidir en todos los casos regidos por la Constitución y las leyes nacionales.» Ahora bien, los puntos regidos por la Constitución se refieren, ó á un punto de ella sobre cuya aplicación no se tenga seguridad, ó á una ley de la que se dude si es constitucional ó no; porque puede ser que una ley del Congreso se aparte algo de las prescripciones de la Constitución; esto es posible cuando menos; y en ese caso, la Corte Suprema tendrá derecho perfecto, de conformidad con el artículo 97, para calificar privadamente si esa ley es constitucional y aplicarla ó no, pero solo en el caso particular á petición de parte, y sin dictar una declaración general, como proceden los otros poderes. Este es el único modo como puede y debe expedirse la Justicia Federal; así es que, cuando se ha dicho que esa atribución no puede ponerse en duda, es en el supuesto de que la Justicia Federal procederá de ese modo, y no por declaraciones generales como los otros poderes que tienen la iniciativa en las leyes.

Paseinos ahora á examinar de donde se deriva la autoridad de la Justicia Federal; si de la soberanía popular, que pudiera modificar sus mandatos y poderes ejerciendo actos posteriores, ó si deriva exclusivamente, como los otros poderes, de la Carta, única base de toda autoridad. Creo que no hay duda respecto á que la autoridad de la Justicia Federal no puede derivarse directamente del pueblo, porque á éste le está prohibido expresamente modificar la Constitución por esta misma, y luego es ésta el único origen de esa autoridad.

Partamos, pues, de esa base, porque si la Constitución es la única que ha podido dar atribuciones á los poderes, las de la Justicia Federal no deben buscarse en otra parte.

Como he indicado pues, tratándose de aplicar una ley orgánica, la Corte Suprema no puede prescindir de examinar el espíritu de esa ley si la encuentra en pugna con la Constitución, la deja á un lado sin declararlo, y así poco á poco irá dejando ilusoria esa ley y enervándola, por decirlo así, por la falta de costumbre en su aplicación. Se vé pues, que la Justicia Federal no puede separarse de esta órbita dentro de la cual están bien marcadas sus atribuciones, como la independencia con que debe proceder á la par de los otros poderes. Es imposible pues, dejar de consignar en el artículo que se discute esta atribución; porque de otra manera sería completamente ilusorio el poder de la Justicia Federal, sería un instrumento pasivo de los otros poderes, un fantasma, señor, con el nombre de Poder So-

berano, y no cumpliría á la par que éstos su mas alta misión, que es hacer efectiva la Constitución aplicándola bien y velando por su observancia, evitando que los otros la invadan ó no la cumpla.

Me permitiré presentar un caso particular para que se me comprenda mejor. Supóngase que la Corte Suprema se halle en la alternativa de aplicar una ley orgánica que ella cree anticonstitucional, ó de aplicarla Constitución porque á su juicio la ley orgánica la contraría ó se aparta de su espíritu en el principio ó prescripción de la Carta á que ella se refiere. Pregunto, señor, ¿qué haría la Corte en ese caso? ¿Aplicaría la ley orgánica á la Constitución? No cabe duda que se decidiría por la segunda, desde que esta es la ley suprema de la cual se derivan todos los poderes y leyes. Se vé pues, que si la ley orgánica es contraria á la Constitución, la Corte no podría aplicar aquella sin violar ésta. Esto es muy claro, señor, y no importa otra cosa la atribución que le concede el artículo que le dá la facultad de interpretar la ley antes de aplicarla y de ejecutar solo aquellas que estén conformes con la Constitución.

Se ha dicho por los opositores del artículo que se discute, que conceder á la Justicia Federal esta atribución es dar un poder ilimitado que ataca hasta cierto punto la soberanía de los otros poderes, haciendo de esa manera, ilusorio el ejercicio de la soberanía de estos últimos y absorbiendo sus atribuciones. Me parece que semejante temor es completamente infundado. En primer lugar, la Justicia Federal no tiene el derecho de iniciativa en la sanción de las leyes, y solo puede pronunciarse á petición de parte, de oficio y en casos particulares; por consiguiente, es claro que solo con la repetición quizá lentísima de su no aplicación vendría á enervarse despues de mucho tiempo alguna ley orgánica, y digo que despues de mucho tiempo recién podría quedar enervada una ley, porque en nuestro país los casos de queja ó de alegato sobre puntos regidos por la Constitución, probablemente serán muy raros. Pero supongamos que una ley pueda ser derogada en poco tiempo, no lo serian por eso 500 leyes orgánicas que rigen en la Confederación para que pueda decirse que quedarían anulados los otros poderes; porque no puede suponerse que todas esas leyes son inconstitucionales, ó que la Corte Suprema las declara tales solo con la intención y el deseo de anular á los otros poderes.

Por otra parte, supongamos el caso de que la Justicia Federal abuse de esta atribución, que una ley sea en el concepto del Congreso perfectamente constitucional, y que, sin embargo, la Corte diga que no lo es, y se niegue á aplicarla. Supóngase, decía, que el

Congreso y el país tuviesen conciencia de que ese Tribunal no había querido aplicar una ley constitucional, sancionada por aquel con el objeto de hacer bien al país y de cumplir la Constitución; y que, por consiguiente, que la Corte se había apartado de sus atribuciones, puesto que, según el artículo 95 de la Constitución, los Jueces de la Corte Suprema deben prestar juramento de *desempeñar sus obligaciones administrando la Justicia bien y legalmente y en conformidad á lo que prescribe la Constitución*: en tal caso, decía, los Jueces de la Suprema Corte no habrían cumplido con su deber y habrían faltado terminantemente á la Constitución. Entonces se trataba ya de un caso de violación de la Carta por los miembros de la Justicia Federal. Bien pues, aun en ese supuesto hay un medio de evitar ese mal; en tal caso el Congreso tiene en su mano el poder de anular todo el personal de la Suprema Corte, haciendo desaparecer uno á uno todos esos Jueces, desde que cada uno de sus miembros puede ser acusado por violación de la Constitución y demás delitos que se expresan en ésta, por la Cámara de Diputados y destituidos por el Senado; y en tal caso desaparecería todo el personal de la Suprema Corte.

No puede dudarse que la Corte violaría la Constitución siempre que no quisiese aplicar las leyes perfectamente constitucionales á juicio del Congreso y del país; porque lo mismo se la violaría atacando directamente sus prescripciones textuales y sus principios y espíritu, que paralizando completamente su acción al no cumplir las leyes orgánicas que en su consecuencia se dan para cumplirla y hacerla efectiva para el pueblo en todas sus partes. Si, pues, el Congreso tiene esta atribución que puede ejercer cuando los casos sean tan graves que la Corte haya querido sobreponerse á los otros poderes, en tal caso se nombrarán nuevos Jueces que vengan á desempeñar las funciones de aquellos. Es claro entonces que en último caso no es la Corte Suprema el poder omnipotente y árbitro, sino el Congreso, porque es el único que puede destituir á todos los funcionarios de los otros poderes, incluso al Presidente de la República.

He ahí, pues, como no hay peligro alguno en consignar esta atribución entre las de la Justicia Federal. Parece, pues, probado que ella está perfectamente ajustada á la Carta. Estas son, señor, las razones principales que me deciden á votar en favor del artículo que se discute.

El señor Gutierrez: Como he votado en favor de este artículo tal como está en el proyecto, y como en favor de él se ha dicho tanto, me limitaré á recordar algunas doctrinas para destruir la honrosa y patriótica oposi-

ción que se ha hecho á este artículo. No extraño que esa oposición, celosa de la independencia de los poderes, y de la verdad del sistema, y obrando bajo la influencia del temor de que se levante un poder que absorbiese á los otros, se haya alarmado y creído que no debía concederse esa atribución á la Justicia Federal. Es, pues, en obsequio de esos temores y para tranquilizar la conciencia de los opositores del artículo que voy á permitirme hacer algunas consideraciones, empezando por declarar, que todas mis ideas son tomadas de las doctrinas del pueblo Norte-Americano y de su ciencia política. Debo recordar también que el Poder Judicial tal como ha sido establecido por nuestra Constitución es una copia exacta del Poder Judicial de la Unión Americana. Por consiguiente, debe suponerse que el Congreso Constituyente, al aceptarlo en esa forma, fué teniendo en vista las mismas razones que obraron en el ánimo de los Legisladores de la Unión al crear un Poder Judicial.

Sabemos, señor, que los Norte-Americanos son la personificación de las virtudes y del sentimiento de la democracia, en su mejor y mas perfecto sentido. Por consiguiente, cuando reconocieron los defectos que su primera ley de asociación tenía, trajeron á consideración con calma todos los peligros que amenazaron á la libertad en la misma forma de Gobierno que querían establecer para ponerla al abrigo de todo ataque, vieron que podían venir esos peligros de los poderes colegisladores y del pueblo, y como sabían que la Constitución es el pueblo, que es la emanación más directa de la voluntad de aquel, que sus representantes mismos quisieron ponerla al abrigo de todo embate, y comprendieron entonces que el Poder Judicial era el único que podía obrar con bastante independencia para constituirse en defensor de esa Constitución, que se representaba la voluntad suprema de los pueblos. Sin embargo, señor, los Norte-Americanos no se espantaron de ese Tribunal tan poderoso, porque iba á desempeñar esta misión sagrada, y porque ese pueblo, llevado de su buen sentido, debió siempre comprender que aquel no debía inspirar celos, porque no podría usar de otra arma que de la Justicia, que jamás se separa de la Sabiduría. El poder Legislativo tiene entre sus atribuciones la de discutir el presupuesto, y por consiguiente tiene á su disposición el Tesoro; el Ejecutivo, la facultad de dar empleos, condecoraciones y honores; pero el Poder Judicial, señor, no tiene más que la razón y su independencia; es, pues, completamente un poder inofensivo, y toda su fuerza arranca del acierto y buen juicio de sus deliberaciones y encontraría los límites de su ambición en el punto en que se separase una línea de la Constitución. Así, pues, los Norte-Americanos han

conseguido que la Corte de Justicia, al gestionar sus intereses, lo haga siempre en la balanza de la equidad. La cuestion por consiguiente quedó completamente resuelta en el siglo pasado, y el pueblo perfectamente tranquilo, porque la experiencia le ha mostrado que este poder es el que mas garante los derechos y la libertad del pueblo Norte-Americano.

Nosotros no podemos menos de aceptar este poder en el sentido Norte-Americano, desde el momento que hemos dado á nuestro Gobierno la misma forma que aquel; porque nuestro país, señor, se compone de dos pueblos, por decirlo así, el pueblo argentino que se compone de ciudadanos considerados bajo la soberanía provincial, y del pueblo confederado que representa la alianza de todos los pueblos regidos por la Constitución. Aunque esto se considere una ficcion, se comprenderá la necesidad de tener dos justicias para estos dos pueblos; el pueblo nacional necesitaba tambien una justicia suya, y ahí viene la existencia y naturaleza del Poder Judicial Nacional. Se han aducido varios ejemplos para probar de qué manera el Poder Judicial podria coartar y defraudar las atribuciones de los otros poderes. Son casos extremos, señor, y que rara vez se presentarán en la práctica. Se acaba de decir muy bien que el Poder Judicial no dicta leyes anulatorias de las que sancionan los otros poderes, sino que cuando una persona reclama su fallo, alegando que tal ley ofende el derecho del individuo, entonces el juzga y falla en el caso contencioso particular; pero de una manera muda, por decirlo así, y sin dictar declaraciones generales; obra solamente como un poder moderador, y siempre de conformidad al derecho consagrado por la Constitución y sin ofender á los otros poderes. Señor ¿á qué ciudadano que conozca este modo de obrar en la Corte Suprema no le será simpático?

En la region política es tan tranquilizador el ejercicio de la soberanía del Poder Judicial, cuanto puede serlo la grata seguridad de que existe un Tribunal ante el cual pueden hacerse valederos y ciertos derechos que la ley y la razon nos garanten.

Creo, pues, haber sentado algunas doctrinas que podrian servir para tranquilizar la conciencia de mis honorables colegas que hacen oposicion al artículo que se discute acerca de los temores que les asisten sobre la naturaleza y atribuciones del Poder Judicial.

Son estas las razones por las cuales votaré en favor del artículo 2º, que me parece perfectamente conforme al espíritu de la Constitución.

El señor Quesada: Habria deseado escuchar algo nuevo para tranquilizar los temores que me asisten sobre la parte de este artículo

que confiere á la Justicia Federal la facultad de cumplir ó dejar de cumplir las leyes, segun entienda que están en conformidad ó no con la Constitución, sus principios y doctrinas. Se han citado con vaguedad las doctrinas Norte-Americanas en apoyo del artículo; se han repetido las mismas razones, moviéndose en un mismo círculo, sin contestar la oposicion que se hace, sin apoyar en hechos la conveniencia de esa facultad omnimoda acordada á la Justicia Federal. Tendría curiosidad, señor, de que se fijen los derechos históricos, en virtud de los cuales pueda asegurarse que esa atribucion haya producido tan grandes resultados; quisiera que las doctrinas que se citan, fuesen corroboradas con los beneficios que la historia reconozca que ese poder ha producido en los Estados Unidos de la América del Norte.

Se parte de la base de que el Congreso pueda violar la Constitución, de que puede adulterar sus doctrinas al legislar, y para evitar este peligro remoto, se quiere que haya un poder que no cumpla sus leyes, sin que se garantá al país de los abusos de este mismo poder, sin que se limite su accion acordándole, por el contrario, la omnipotencia. Yo creo, por el contrario, que el Congreso presenta mayores garantías que el Poder Judicial por lo limitado de sus atribuciones segun la Constitución misma, por las precauciones que ella ha tomado para la eleccion de sus miembros, por la manera como se renuevan las Cámaras y por la responsabilidad moral de los elegidos del pueblo, de los que representan con mas exactitud las exigencias populares, las tendencias de la época, las necesidades del país.

Cuando se dicta una ley, la minoría ha tenido la palabra para combatirla y la discusion ha hecho triunfar el principio dominante, sometiéndose así á las decisiones de las mayorías, que es el dogma salvador de las democracias. Los abusos de ese poder, pueden ser atacados por la prensa; legisla en presencia del pueblo y para el pueblo; cuando un Diputado ha perdido la confianza de sus electores, éstos llevarán al Congreso un candidato que les ofrezca mayores garantías; el mecanismo observado para la discusion y sancion de las leyes, el veto del Ejecutivo, los trabajos hechos en presencia del pueblo mismo, garanten suficientemente la constitucionalidad de las leyes. Mientras tanto el Poder Judicial obra decididamente; sus abusos no son conocidos sino de los interesados en el proceso, su responsabilidad está llena de trabas, su empleo es vitalicio, su omnipotencia extrema. ¿Quién garante al pueblo de los abusos de este poder que lentamente mina las leyes, deja de cumplirlas, segun la buena voluntad ó inteligencia de nueve Jueces? Es poder sin contrapeso.

Lo que yo descarta, pues, para desvanecer los

temores que hemos manifestado los opositores del artículo en discusión, es escuchar la historia judicial del Norte-América, que se probase con hechos prácticos la influencia que el Poder Judicial ha tenido en los Estados-Unidos: de otro modo, señor, tendríamos que movernos en las regiones de las teorías abstractas. Decir que la prosperidad de los Estados-Unidos depende de la organización del Poder Judicial es tan absurdo como si se dijese que la esclavatura en el Brasil es la causa de su prosperidad y de su poder. Otras causas han levantado á los Norte-Americanos á la altura en que se encuentran, no la organización de la Justicia Federal. Los poderes judiciales reposan sobre una base sólida, la aplicación de la ley; y en todos los países cultos éste ha dado excelentes resultados; darle otras atribuciones es desnaturalizarlo, convertirlo en un poder terrible. La Constitución le ha fijado su rol, y no es por cierto el que hoy pretenden asignarle por la ley orgánica. Opino, pues, porque no se le conceda el juicio previo sobre la constitucionalidad de las leyes.

Si algun poder ha de ser omnipotente, creo que el que ofrece menos peligro es el poder legislativo, por eso sus leyes deben cumplirse siempre, porque de un personal tan numeroso, no puede sospecharse una violación de la Constitución Argentina.

El señor Ministro de Justicia: Despues de tanto que se ha dicho sobre el punto que se discute, parecia imposible que pudieran quedar dudas relativamente á la conveniencia del art. 2º. Sin embargo, se insiste siempre sobre el temor que inspira á los opositores la importancia que se quiere dar al Poder Judicial; se dice que ese poder es demasiado grande, y con esto se cree haberlo dicho todo, pero no se para un momento la atencion en que ese poder es grande, porque es el contrapeso de los otros; que es grande, señor, porque para evitar los avances del Poder Legislativo y Ejecutivo es necesario crear otro poder tan grande como aquellos, siempre que quede circunscripto en los límites constitucionales.

Se ha dicho muy bien por algunos señores Diputados que el Poder Judicial no tiene la iniciativa en la sancion de las leyes, y que su accion solo se manifiesta no aplicando las que en su concepto son inconstitucionales, porque el Congreso no ha tenido facultad de dictarlas, ni puede observarlas el pueblo que ha jurado esa Constitución.

Se ha dicho tambien en el propósito de impugnar este artículo que el Poder Judicial establecido en Norte-América es una novedad tan grande que es necesario probar con hechos prácticos que ha contribuido eficazmente á la felicidad de los pueblos de la Union Ame-

ricana, y consiguientemente se pide hasta la historia judicial de aquel pueblo. Bien pues, yo deseo tambien que se pruebe que el Poder Judicial sin esa atribucion puede ser un verdadero poder, segun nuestro sistema, y no solamente un ramo de los otros poderes. Siento mucho, señor, tener que repetir algunas explicaciones que hice en otro momento; sin embargo, *este asunto es tan importante que debe aclararse bien el espíritu del artículo que se discute.*

Se ha dicho, señor, que es muy peligroso é innecesario dar esta atribucion al Poder Judicial porque debe suponerse que el Congreso y el Ejecutivo al sancionar las leyes obrarán siempre con arreglo á la Constitución, suponiendo así la infalibilidad en aquellos. Yo sostengo que la Constitución no ha dado votos de confianza ilimitados á ninguno de los poderes; y que por el contrario, todos han sido limitados por aquella en la órbita de ciertas atribuciones de las cuales no pueden avanzar una línea mas allá, sin cometer una violación de la Carta. Quiero, pues, que la Honorable Cámara escuche el art. 29 de nuestra Constitución; es muy hermoso, señores, y bien merece escucharse su lectura. Se leyó éste; su tenor es el siguiente: «El Congreso no puede conceder al Ejecutivo Nacional ni las Legislaturas Provinciales á los Gobernadores de Provincia, *facultades extraordinarias ni la suma del Poder público*, ni otorgarles *sumisiones ó supremacías* por las que la vida, el honor ó las fortunas de los argentinos queden á merced de Gobiernos ó persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insana, y sujetarán á los que los formulen, consientan ó firmen, á la responsabilidad y pena de los infames traidores á la Patria.» Bien, señor, tenemos en este artículo establecida, no la infalibilidad del Congreso, sino la posibilidad de que alguna vez quiera salir de la órbita de sus atribuciones; tenemos la necesidad de procesar en ciertos casos á la misma soberanía que ha sancionado esa Carta; ¿y quién, señor, sino la Suprema Corte puede investir el caracter de Juez en ese caso? Porque el Congreso puede decir por una ley, «encargo de la suma del poder público al Presidente de la Confederación», y entonces dice la Constitución, «este acto sujeta á los que lo formulen, consientan ó firmen, á la pena de los infames traidores á la Patria». ¿Dónde está, pues, la infalibilidad y omnipotencia del Congreso? Es claro entonces que la Constitución ha creído que el Congreso puede descarriarse, y para ese caso... A nadie se oculta, señor, que las pasiones políticas pueden tener un alcance extraordinario.

Es necesaria toda la independencia de otros poderes para establecer estas reglas de armo-

nia entre los otros poderes muy altos, (porque eso no ofende á nadie, señor); pero que no pueden trabarse jamás en el ejercicio de sus respectivas atribuciones.

Puede llegar pues, un caso en que se dicte una ley inconstitucional, y entonces, señor, ¿qué argentino cumplirá antes con esa ley que con la Constitución? Se dice que esas leyes han recibido el voto de numerosas corporaciones, y que por lo mismo ofrecen las mayores garantías de constitucionalidad. ¿Y la Constitución, señor, no ha recibido el voto de toda la Nación, que es mucho mas numerosa? ¿Por qué, pues, no hemos de defender y observar ante toda ley esa Constitución, á la que juran respeto y obediencia, al tomar posesion de su cargo, los miembros del Congreso, los Jueces de la Suprema Corte, y los altos funcionarios del Poder Ejecutivo? Si, pues, tambien los Jueces de la Suprema Corte pueden ser enjuiciados por violacion de la Constitución, ¿por qué queremos imponerles la aplicacion de aplicar ciegamente la ley?

Es preciso pues, dar al Poder Judicial toda la importancia de un poder soberano, si queremos servir las intenciones de la Carta.

El señor Zuviria: Nos hemos elevado muy alto, y perdiendo de vista el punto de partida comprometemos la claridad y el éxito del debate cada vez mas oscuro y prolongado. Creo que buscando el origen, aumentaremos la luz. Todos conocemos las funciones anexas al Poder Judicial, aunque no pertenezcan á países federativos, aunque no tengan como en el nuestro, atribuciones tan altas y distinguidas.

Todo el mundo sabe que el Poder Legislativo dicta la ley; pero ésta no tiene su perfeccion absoluta, mientras no haya sido sancionada por el Poder Ejecutivo, y aun no la tiene despues de esto, si en los casos contenciosos no ha sido aplicada á ellos, despues de haber sido interpretada judicialmente. Esta es la organizacion de los tres altos poderes del Estado en casi todos los países civilizados. Ninguno de esos poderes usurpa la omnipotencia que cadauno tiene en su órbita; omnipotencia coartada solo por las responsabilidades constitucionales. Nunca, nunca se ha visto revocada una ley del Congreso por un decreto del Ejecutivo, como no se verá revocado por ninguno de ambos el fallo en asuntos contenciosos de un Tribunal Judicial, cualquiera que sea.

Ahora bien, señor, donde hay ley, hay justicia, donde una ley nacional toma una parte de soberania, dejando la otra parte á los Estados, allí debe haber una justicia nacional separada de la provincial. Esa justicia nacional administrada por Tribunales que se han llamado Federales, decide todos los asuntos ó cuestiones que versen sobre puntos

regidos por la Constitucion y leyes nacionales que forman su legislacion propia. No les neguemos el derecho de entenderlas, de interpretarlas, de aplicarlas ó no aplicarlas á este ó aquel caso especial; de dar la preferencia á esta ley sobre aquella, cuando la justicia ó la conciencia de esos funcionarios, así lo exija; porque, señor, esta es la atribucion inalienable del último de los Jueces.

Pero parece que la dificultad del artículo en discusion consiste, en que se recomienda á los Jueces que apliquen las leyes siempre que las encuentren conformes con la Constitución y dando la preferencia á ésta. Nada más sensato señor. Las leyes nacionales por su misma concision pueden llegar á ser confusas; por su número y por la precipitacion con que á veces se sancionan en circunstancias dadas, pueden contener algun principio que pugne con el texto expreso de nuestra Carta, y entonces, la decision debe ser sin duda en favor de ésta.

Se niega hasta la posibilidad de tal conflicto, se cree imposible una ley de tal naturaleza, y voy á citar, señor, una ley vigente y hoy diametralmente opuesta á la Constitución, es el primer caso que viene á mi memoria. Pregunto ahora á mis honorables colegas de la oposicion, en el lugar de Jueces, ¿á cuál darían la preferencia?

Una de las circunstancias que llama la atencion es la de que los Tribunales Federales en el transcurso de los tiempos, y con una serie no interrumpida de decisiones en casos contenciosos, fijarán definitivamente el sentido de una ley tal vez de una manera contraria al espíritu del Legislador; pero en tal caso, señor, queda á éste la iniciativa en otra ley que fije el verdadero sentido de la primera, sin que introduciéndose de otro modo en las funciones de interpretacion y aplicacion propias de los Jueces, se convierta el Congreso en Tribunal de Justicia, ni las leyes en autos acordados.

En resúmen, estamos invadiendo en el curso del debate el artículo de la Constitución que dá á la Corte Suprema y Tribunales Federales, el conocimiento y decision sobre puntos regidos por nuestra Carta y las leyes de la Confederacion.

El señor Garcia: Siento que hasta ahora no se haya dado por los sostenedores del proyecto una razon conveniente para decidirme en virtud de ella á votar por el artículo que se discute; porque todos los argumentos que en su apoyo se han aducido veo que parten de un principio hipotético imposible, falso si se quiere, cual es la posibilidad de que el Congreso sancione leyes contrarias á la Constitución y que el Poder Ejecutivo á su vez incurra en igual error, deduciendo de ahí la necesidad

de dar al Poder Judicial la facultad de decidir si esas sanciones están ó no conformes á las prescripciones constitucionales, para en el 2º caso aplicarlas ó no á los casos ocurientes regidos por ella, es decir, para dejarlas en desuso. Pero, señores, esto á más de ser extraño á la naturaleza y atribuciones que la misma Carta acuerda al Poder Judicial, es absurdo; porque ello importaría sancionar la infalibilidad de los miembros del Tribunal Federal y dar por sentada la posibilidad de incurrir en una inconstitucionalidad á los del Congreso y al Ejecutivo Nacional, siendo mas natural que los mas en número vean mas claro que los menos, es decir, que es mas fácil, á estar por los principios de los sostenedores del proyecto, que incurran en una inconstitucionalidad los miembros del Poder Legislativo y Ejecutivo á su vez, que uno ó mas miembros del Poder Judicial, á quien tan extensa y absoluta facultad quiere dársele. He escuchado con atencion todos los argumentos que bajo el mismo principio hipotético y falso se han aducido, y lo repito, que ninguno satisfactorio he oído, pues que todos ellos se apartan mucho del verdadero punto de vista bajo el que debiéramos discutir la cuestion actual. El para mí no es otro, que si al Poder Judicial, por su naturaleza y de conformidad á las prescripciones de la Carta, corresponde ó no decidir sobre la constitucionalidad é inconstitucionalidad de una ley del Congreso. Yo por mi parte le niego esa atribucion; porque como he dicho, es extraña á su naturaleza y objeto, que no es otro que aplicar las leyes á los casos, es decir, decidir sobre si ellos están ó no comprendidos en la ley; y no si ésta es ó no conforme con la Carta.

Tal atribucion vendria á investir al Poder Judicial con el carácter hasta cierto punto, de colegislador, no solo extraño á su naturaleza y mision, sino tambien contrario á una atribucion constitucional consignada en su art. 97. Llamo la atencion de la Honorable Cámara sobre las frases *conocer y decidir en los casos regidos* consignadas en el artículo citado. Interpelo al señor Ministro y á los honorables Diputados sostenedores del proyecto sobre el sentido de esas frases *conocer y decidir en los casos regidos*. Quiero oír de ellos cual es la acepcion jurídica, porque así debemos hablar, de esas frases que envuelven en sí la naturaleza, mision y objeto del Poder Judicial, determinándole al mismo tiempo por la palabra *regidos* la órbita en que debe girar en el desarrollo de sus funciones. Quiero oír, repito, de ellos cual es la acepcion verdadera de esas frases; porque no concibo que pueda dárseles otra que la que yo les he dado; porque ese es el sentido con que son universalmente recibidas y lo han sido siempre; porque decir que

en ellas se envuelve la atribucion que hoy quiere dársele al Poder Judicial es violentar su sentido, es contrariarlo, es por fin desnaturalizar ese poder, y hacerlo absoluto y despótico, dándole la facultad de aplicar ó no la ley á su arbitrio.

Un señor Diputado ha puesto el caso de que una ley dictada por el Congreso prescriba la pena de azotes, y ha preguntado, si los opositores del artículo se decidirian por la ley del Congreso ó por la sancion constitucional que los prohíbe. Contestaré. En primer lugar, dudo si esa sancion constitucional es extensiva á todos los casos, á todos los delitos y me fundo en que no es su prohibicion universal, puesto que ella, segun el texto, es referente á los delitos políticos. En este caso pues, si el Congreso dictase la pena de azotes en este ó aquel delito comun no político, creo que un Juez debiera ceñirse á la ley posterior, y de ninguna manera esquivar su cumplimiento por el simple y arbitrario pretexto de creer que ella no era ajustada á la prescripcion constitucional. En segundo lugar, niego y negaré siempre la hipótesis de que el Congreso sancione una ley en abierta oposicion con la Carta ó algunos de sus artículos; y aun admitida la hipótesis, menos mal seria no consignar esa atribucion en el artículo que dar por ella una especie de veto, sin remedio, al Poder Judicial. Digo sin remedio, porque efectivamente una vez que el Poder Judicial tácita ó expresamente declare que una ley no es constitucional, aun cuando lo fuera, ya no habria remedio, el Congreso tendria que callarse, y tal vez, uno ó mas ciudadanos que en virtud de esa ley se creian garantidos para este ó aquel caso, tendrian que sufrir graves perjuicios inocentemente, y sin esperanza de indemnizacion ó desagravio. Tales son las consecuencias que veo en la sancion del artículo tal cual está redactado.

Por el señor Ministro se ha invocado el art. 29 de la Carta por el que se prohíbe conceder facultades extraordinarias, la suma del poder, etc., etc. Yo invoco tambien en mi apoyo ese artículo, y creo que él es muy favorable á propósito de las ideas que sostengo. No solo es el Poder Ejecutivo á quien se debe temer: no solo á él se le debe negar la suma del poder. No, señor, al Judicial tambien no le debemos acordar prerrogativas y supremacias por las que el honor, la vida de los argentinos y su fortuna queden á merced de ese solo poder como indispensablemente sucederá, una vez que se le acuerde esa absoluta facultad ó supremacia.

Son estas las razones en virtud de las que votaré contra ese artículo.

El señor Ministro: No se trata, señor, de dar al Poder Judicial facultades extraordi-

narias ni la suma del poder público, sino la atribucion de aplicar la Constitución y las leyes en los casos contenciosos particulares. Bien pues, acaba de asegurar el señor Diputado que en el caso de un conflicto entre la ley y la Constitución, él aplicaria la ley aunque prescribiese la pena de azotes que está prohibida expresamente por aquella. Sin embargo, el señor Diputado, al incorporarse á esta Honorable Cámara, debe haber jurado obrar en todo en conformidad á lo que prescribe la Constitución. No ve pues, que esa seria una conducta refractaria; que esa Constitución...

El señor García: Permítame el señor Ministro que le interrumpa para hacerle observar, que me he referido al caso hipotético en que la pena de azotes por delitos comunes no está expresamente prohibida por la Constitución, pues solo lo está por los delitos políticos.

El señor Ministro continuó: Entonces me permitiré observarle al señor Diputado que está en un terreno muy movedizo; porque antes dijo, que si hubiese una ley del Congreso que prescribiera la pena de azotes aplicaria como Juez antes la ley que la Constitución. Si ahora dice de que la ley prescribe aquella pena en delitos comunes, y que la Constitución se refiere á los delitos políticos, no hacia entonces referencia á una ley que estuviese en pugna con aquella, ni tampoco un argumento. Supongo que la ley del Congreso permitiese la pena de azotes por delitos políticos, el señor Diputado como Juez, aplicaria esa ley que estaba en pugna con la Constitución?

El señor García: Niego la hipótesis.

El señor Ministro: Voy á probársela, señor Diputado. El artículo 29 no ha sido puesto en la Constitución inútilmente por el Congreso Constituyente, sino porque alguna vez puede suceder el caso á que se refiere, que es peor sin duda que la pena de azotes. Pero si el señor Diputado niega que puede llegar un caso en que el Congreso dicte una ley contraria á la Constitución, ¿qué tiene entonces de peligrosa esta atribucion, si no puede llegar el caso en que el Poder Judicial haga uso de ella? Si sucede lo contrario, es indispensable conceder esta atribucion al Poder Judicial desde que se conceda que el Congreso puede dar leyes inconstitucionales; porque las pasiones políticas son muy arrebatadas, y no dejan lugar muchas veces á la discusion y á la prudencia que son esenciales para el acierto de los cuerpos deliberantes: así lo ha acreditado la experiencia en todas partes, y especialmente en Francia durante la revolucion, donde las pasiones del momento han tomado el nombre de la soberania del pueblo.

Véase, pues, como pueden dictarse leyes inconstitucionales; y cuando se obliga á un Juez á prestar juramento de *administrar la justicia bien y legalmente, y en conformidad de lo que prescribe la Constitución*, no sé como se le quiere imponer el martirio moral de perjurarse esa Constitución, aplicando con preferencia la ley que la viola.

El señor Alvear: Manifesté en la sesion anterior mi sentimiento por la oposicion que se hacia á un artículo en que á mi entender está la esencia de las atribuciones del Poder Judicial que se quiere establecer: este sentimiento es tanto mas verdadero cuanto que me complazco reconocer la inteligencia y patriotismo de los señores Diputados que han encabezado la oposicion. Esta cuestion no es nueva, señores: no tratamos de establecer un Tribunal que no exista en el mundo. Cuando se trató de reformar la Constitución de la primera República en América, se suscitaron idénticas objeciones en la Constitución Americana, al tratar de conceder esta misma atribucion al Poder Judicial de los Estados-Unidos. Sin embargo, esas objeciones fueron debatidas en la convencion y por la prensa, de un modo completamente satisfactorio como puede verse en el *Federalista americano*, escrito por los hombres mas eminentes de la época. La experiencia de muchos años ha comprobado hasta la evidencia la sabiduría de esa institución: por eso me causa sorpresa, señor, que uno de mis honrables colegas haya pedido los datos históricos y prácticos, los comprobantes que arguyan la influencia benéfica del Poder Judicial en Norte-América. Los datos históricos que se piden, señor Presidente, son la historia de setenta años de un país eminentemente celoso de sus franquicias y el mas conocedor de sus derechos entre los antiguos y modernos: es el respeto y admiracion que inspira un país que en América y casi al principio de su existencia política ha llegado ya á hacer sombra á las naciones mas civilizadas y poderosas del mundo todo, y que sirve de modelo á todos los pueblos libres por su sumision á la ley, su paz interior y su arrogante independencia. Si este ejemplo, señor, no es bastante, si esto no es un argumento histórico y poderoso en el ánimo del señor Diputado á quien contesto, descenderé tambien á buscar algunas razones en favor del artículo, basadas en la teoria misma del Gobierno que hemos organizado: una de esas teorías es, señores, la imprescindible necesidad de limitar los poderes públicos, con el objeto de establecer entre ellos ese equilibrio que solo puede asegurarnos la libertad en la ley, el orden y la estabilidad de nuestros derechos. El artículo 28 de la Constitución dice terminantemente que los principios, derechos y garantías req-

nocidas en ella, no podrian ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. Bien señor, se vé por este artículo que la Constitucion ha querido limitar las atribuciones del poder que dicta las leyes; y ¿cuál seria entonces el dique que contuviese á ese poder en sus límites y que los hiciese efectivos, si no creásemos el Poder Judicial que hoy se discute? ¿No seria altamente ridículo, señor, limitar el principio de legislar y dejar toda omnipotencia á los legisladores? ¿Cómo se niega entonces la necesidad de hacer práctico entre nosotros ese principio, el mas bello de nuestra Constitucion, que como se ha dicho muy bien por algun señor Diputado, es la voluntad originaria de un pueblo? Y nosotros, señores, que solo somos sus delegados para hacer efectiva su voluntad, no podemos arrogarnos mas atribuciones que las que él nos acordó por la Carta de Mayo.

Es verdaderamente sorprendente que en un país como el nuestro, que ha sido siempre víctima de los poderes Legislativo y Ejecutivo, se les quiera conservar siempre en esa omnipotencia de que siempre abusaron, y se susciten temores sobre los avances de un tercer poder, en el momento mismo en que se trata de concederle una atribucion, que no importa otra cosa que la facultad de entender los abusos de aquellos, y sostener la inviolabilidad de nuestra Carta que es la Suprema Ley del Estado.

Señor, ¿cómo podríamos negarnos á sancionar una institucion que, aunque no fuese mas que por no haber sido absurda entre nosotros debemos adoptar, para probar sus efectos? Los grandes y benéficos resultados que ha producido en Norte América ¿no merecerian de nosotros el tributo de su ensayo? Se teme señor, la omnipotencia de ese poder que no tiene otra mision que garantizar la observancia de los principios de la Constitucion, y se quiere conservar al Legislativo la facultad de atropellarla. Si el abuso fuese indispensable, yo le preferiria pasivo y lento, mas bien que activo y violento como podria surgir de este. La ley fundamental de la República, única arma con que cuenta el Poder Judicial ¿es acaso formidable para temer su accion? Pero supongamos que por una série sucesiva de casos se descubriese en el Poder Judicial, tendencias á invadir las atribuciones de los otros poderes; ¿no hay medios poderosos para contener esas invasiones? ¿Cómo puede concebirse, señor, que un poder esencialmente pasivo como Judicial, pueda entrar en pugna directa con los otros, y menos con el Legislativo que tiene en su mano el derecho de acusarlo y condenarlo?

La cuestion, en mi concepto, debe reducirse á esta proposicion, ¿cual es la ley que

merece la preferencia ante nuestros Tribunales, la voluntad originaria del pueblo ó las leyes del Congreso? ¿Estas leyes que acaso son dictadas en la efervescencia de las pasiones populares, ó aquella que es la voluntad originaria, fundamental, la base de las otras? La solucion no puede ser dudosa. Bien pues. El poder de interpretar las leyes envuelve necesariamente la funcion de juzgar si ellas son conformes con la Constitucion ó no; y en caso de no serlo, declararlas nulas y sin efecto. Como la Constitucion es la suprema ley de la tierra, en un conflicto entre esta ley (la Constitucion) y las leyes, ya sean del Congreso ó de los Estados, se hace el deber del Poder Judicial el seguir aquella que es de obligacion primordial. Esto resulta de la verdadera teoria de los Gobiernos constituidos en república. Porque de otra manera los actos de las Legislaturas y Gobiernos vendrian en efecto á ser supremos y sin contrapeso, no obstante cualquiera limitacion ó prohibicion contenidas en la Constitucion, y usurpaciones del carácter mas inequívoco y peligroso podrian asumirse sin remedio alguno al alcance de los ciudadanos. El Poder Judicial, señor, cual lo reconoce la Constitucion, se extiende á todos los casos que surgen bajo de ella. ¿Podria ser la intencion de los que acordaron este poder, el decir que al ejercerlo no se examinase la Constitucion? ¿Que un caso surgido bajo la Constitucion, se decidiera sin examinar este instrumento bajo del cual habia surgido?

En algunos casos pues, se ha de examinar la Constitucion por los jueces, y si esto se admite ¿cómo puede limitarse el alcance de este exámen? Por consiguiente se ve que esta atribucion que se concede al Tribunal Federal, de estar primero á la aplicacion de la Constitucion que á las leyes del Congreso, es la mas alta garantia que se ha inventado para contener los abusos y el despotismo de las mayorias. Todos los historiadores modernos, todos los viajeros concienzudos que han hablado de la América del Norte, han reconocido la influencia benéfica que el Poder Judicial ejerce en aquel país. Tocqueville, señor, atribuye á tres causas la conservacion y el progreso de la democracia en América: la 1ª su posicion geográfica, la 2ª su forma federativa de Gobierno, y la 3ª la organizacion de su sistema judicial. En otro punto dice tambien Tocqueville, que los Tribunales Federales no solo garanten al pueblo el uso de sus derechos, sino que le enseñan el arte de la libertad. Si pues, tenemos en nuestro favor la opinion de todos los jurisconsultos americanos y filósofos extranjeros, que han procurado descubrir el gran secreto de la democracia en América; si uno solo de esos hom-

bres no ha podido desconocer las ventajas de su sistema judicial; si lo conserva siempre con las mismas atribuciones el pueblo mas celoso de sus libertades, ¿por qué nosotros desdenamos la aplicacion de un sistema que tan buenos resultados ha producido, justamente en el país mas análogo á nuestra forma de Gobierno? Creo pues, que atendiendo á las teorías de nuestra organizacion política, á la conservacion de los principios establecidos en la Carta, como voluntad originaria del pueblo, á la opinion de los sabios, y al ejemplo histórico que nos presenta la gran República Americana, debemos sin trepidar votar por la sancion de este artículo, dejando de este modo establecido el Tribunal Federal con las grandes atribuciones que le corresponden.

He dicho.

Dado el punto por suficientemente discutido, se sometió á votacion el art. 2º y fué aprobado por veinte votos contra nueve. Se hizo un cuarto intermedio.

Vueltos los señores Diputados á sus asientos se puso en discusion el art. 3º: su tenor es el siguiente.

Art. 3º El primordial objeto de la Justicia Federal es mantener en vigor y en observancia la Constitución Nacional en los casos contenciosos que ocurran, interpretando en ellos las leyes uniformemente y aplicándolas conforme á la Constitución, y no de otra suerte.

El señor Garcia dijo: En el artículo que se discute veo consignado este período «interpretando las leyes uniformemente y aplicándolas conforme á la Constitución y no de otra suerte», y como en virtud de mi disconformidad con él he de votar contra el artículo voy á manifestar las razones que para ello me asisten.

Ya aquí se presenta completamente desarrollado el pensamiento consignado en el artículo anterior, á que tambien hice oposicion, y se deja ver esa atribucion absoluta, omnímoda é inalicable con que se quiere investir al Poder Judicial contra la naturaleza del mismo.

El Poder Judicial, señores, no tiene ni puede tener mas atribucion que la de aplicar leyes á los casos ocurrentes, es decir, conocer y decidir si este ó aquel caso está ó no comprendido en una ley nacional, sea esta la Constitución ó las leyes que posteriormente sancionare el Congreso. Esta es su única y exclusiva mision segun así lo exige su naturaleza y lo prescribe la Constitución en su artículo 97 donde dice: «Corresponde á la Suprema Corte y á los Tribunales inferiores de la Confederacion el conocimiento y decision de todas las causas que versen

sobre puntos regidos por la Constitución, por leyes nacionales, etc».

Pregunto yo ahora, ¿qué importa esas palabras *conocer y decidir*? ¿Cuál es la acepcion verdadera de esas dos frases y de la de *puntos regidos*? ¿Qué importan, repito, esas frases que constituyen la naturaleza y el ser del Poder Judicial? De cierto que no se dirá que en ellas está comprendida esa facultad extraordinaria de decidir si esta ó aquella ley del Congreso es ó no conforme con la Carta; ni menos la de, en un caso ocurrente, abstenerse arbitrariamente de aplicar una ley del Congreso por la simple razon de que un Juez de Distrito, ó los miembros de las Cortes inferiores, ó los de la Suprema, crean ó se les antoje creer que esa ley es contraria á la Constitución. ¿Por qué en un caso suponer menos falibilidad, ó mas bien dicho infalibilidad respecto de un individuo, de tres ó nueve, y no solo negar esta sino admitir la hipótesis de que el Congreso, cuyo personal es mas numeroso, y el Gobierno á su vez, incurran en una inconstitucionalidad? ¿Cómo exigir interpretacion y aplicacion uniforme, cuando es moralmente imposible el exigir á un Juez de Distrito que piense y conciba una ley de la misma manera que otro? Yo, señores, veo en esto no solo el peligro que corre de dar al Poder Judicial esa facultad absoluta para de un modo indirecto dejar en desuso una ley nacional, la inuniformidad de los fallos que tanto debiéramos esmerarnos en garantizar, sino tambien un ataque directo contra esa misma Constitución que tanto se ha invocado. Por otra parte, meditemos un momento en lo que importa la palabra *interpretacion* y lo que una vez reducida á la práctica ella vale, y entonces veremos la inaplicabilidad de la misma en el sentido que quiere dársele; para esto descenderé á vulgaridades que acaso no estará demás el recordar. Sabido es que no hay, por lo menos hasta hoy no se conocen mas que tres clases de interpretacion: auténtica, que corresponde únicamente al Legislador; doctrinal, propia de los abogados ó jurisconsultos, y usual, exclusiva de los magistrados ó jueces. Ahora bien, pregunto yo ¿á cuál de estas, una vez sancionado el artículo, tendria que ceñirse el Tribunal Federal? A las dos primeras no, porque ellas son propiamente del legislador y los jurisconsultos; á la última, se me dirá sin duda, pero en ese caso á falta de leyes tendria que limitarse á arreglar sus fallos á otros precedentes en asuntos de igual naturaleza y de ninguna manera deberia abstenerse de aplicar una ley á un caso ocurrente comprendido en ella como se quiere establecer en el proyecto en discusion.

Son estas las razones que tengo para negar mi voto al artículo en discusion, siempre que se trate de votar tal cual está redactado.

El señor **Ministro de Justicia**: Es precisamente una de las atribuciones más naturales del Poder Judicial interpretar las leyes que va á aplicar; interpretacion que no puede hacerse por el Congreso que solo hace declaraciones generales. Por consiguiente, cuando se suscitase duda sobre la interpretacion de una ley en un caso particular, es la Corte Suprema y no el Congreso, quien puede interpretarla y aplicarla. Cuando éste quisiera interpretar esa ley, no podría hacerlo de otro modo que dictando otra explicativa de la anterior, entrando esa misma ley bajo la jurisdiccion de la Justicia Federal. Me parecen bastantes estas breves observaciones para que el señor Diputado á quien contesto se persuada de que la atribucion que se da al Poder Judicial en este artículo no invade las atribuciones del Congreso.

No haciéndose más observaciones se dió el punto por suficientemente discutido, y puesto á votacion el artículo 3º resultó la afirmativa de veinte votos contra nueve.

Se puso en discusion el artículo 4º; su tenor es el siguiente:

Art. 4º Corresponde á la Justicia Federal el conocimiento y decision de todas las causas que se hallen comprendidas en el artículo 97 de la Constitucion Nacional.

El señor **Ministro** pidió lectura del artículo correlativo del proyecto del honorable Senado, y leído que fué, dijo: El artículo que acaba de leerse es exactamente el 97 de la Constitucion; por consiguiente, cuando ha dicho la Comision en el artículo que propone: «Corresponde á la Justicia Federal el conocimiento y decision de todas las causas que se hallen comprendidas en el artículo 97 de la Constitucion Nacional», ha establecido lo mismo que el Honorable Senado, pero me parece preferible la forma en que éste ha sancionado el artículo; porque como en el proyecto presente al establecer los diferentes Tribunales de Justicia hay que distribuir los casos comprendidos en ese artículo al designar á cada uno su jurisdiccion originaria, tal vez convendría, para consultar la claridad de esta ley, que en este artículo se expresaran todos esos casos. Por consiguiente, esta observacion no tiene otro objeto que el de mejorar la forma de la ley, conservándola como ha sido sancionada por el honorable Senado.

El señor **Funes**: Como ha notado el señor Ministro, la Comision no ha hecho otra cosa que variar la forma en este artículo; porque ha creído que era completamente inútil transcribir en esta ley un artículo constitucional, desde que cualquier Juez no puede dejar de tener un ejemplar de la Constitucion sobre su

mesa, ó por lo menos me parece difícil suponer que ese Juez tenga que aplicar esta ley, sin tener una Constitucion, porque ese solo hecho lo haría inepto para ser Juez. Por consiguiente, no creo que haya motivo para aceptar este artículo en la forma en que ha sido sancionado por el honorable Senado.

El señor **Gutierrez**: Creo que si se conserva el artículo sancionado por el Honorable Senado será mejor, aunque son bastante satisfactorias las consideraciones emitidas por el señor Diputado informante; porque la ley debe estar siempre á la vista del que la maneja, sin que haya necesidad de abrir otro libro para encontrar todas sus prescripciones. Creo, pues, que sería más cómoda esta ley aceptando este artículo tal como ha sido sancionado por el honorable Senado.

El señor **Funes** adujo en contestacion algunas otras consideraciones explanando las que había emitido anteriormente.

El señor **Graz** expuso: Que votaría en contra del artículo porque estaba conforme con la forma adoptada por el Honorable Senado.

De pues de lo cual se procedió á votar el artículo 4º, y resultó aprobado por mayoría.

Puesto á discusion el artículo 5º, su tenor es el siguiente:

Art. 5º La Justicia Federal excluye á la de Provincia en los casos en que aquella tiene por la ley una jurisdiccion original. En los demás casos ejerce una jurisdiccion concurrente con la de Provincia, pero solo en grado de apelacion ó enmienda. Mas en las causas que se susciten entre vecinos de diferentes Provincias, no es excluida la Justicia de Provincia si los de la extraña prorrogasen su jurisdiccion aceptándola.

El señor **García** dijo: Creo que estaría llenada la exigencia del artículo leído, si se consignase en estos términos: «La Justicia Federal excluye á la de Provincia en los casos en que aquella tiene por la ley una jurisdiccion originaria. Mas en las causas que se susciten entre vecinos de diferentes Provincias, no es excluida la Justicia de Provincia, si los de la extraña prorrogasen su jurisdiccion aceptándola». Propongo esta modificacion, señor, porque veo un período de este artículo que absorbe los derechos concedidos á las Provincias en el artículo 101 de la Constitucion, que dice: «Las Provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitucion al Gobierno Federal». Decía, pues, que en la segunda parte de este artículo se dá una ingerencia indebida á los Tribunales Federales para que puedan juzgar sobre asuntos deferidos exclusivamente por la Constitucion á las justicias provinciales, porque los fallos á que me refiero afectarían solo al derecho comun, y se pronuncian hoy con

arreglo á los Códigos españoles y las leyes de la Confederacion, y particulares de cada Provincia. Pero los fallos de la Justicia Federal son más altos, señor, y de otro orden; los asuntos sobre que ella debe entender están expresados en el artículo 97 de la Constitucion. Una vez que se sancione, pues, que en esos casos la Justicia Federal ejerza una jurisdiccion concurrente con la de Provincia, ya sea en grado de apelacion ó de otro modo, invadiría y atacaría las atribuciones del Poder Judicial de Provincia. Estas son, señor, las consideraciones por las que votaré en contra del artículo, si no se hace en él la modificacion que he tenido el honor de proponer.

El señor Funes: Si el señor Diputado se detiene un poco á considerar este artículo se convencerá de que sufre una equivocacion al creer que se concede á la Justicia Federal una ingerencia indebida en los asuntos deferidos por la Constitucion á las Justicias de Provincias. El artículo dice que en los casos en que la Justicia Federal no ejerce una jurisdiccion originaria, tiene una jurisdiccion concurrente con la de Provincia; *pero solo en grado de apelacion ó enmienda*. Por ejemplo, en los contratos entre vecinos de una misma Provincia entenderán en general los Tribunales Provinciales, pero si sucede que en el proceso resulta interesada la Constitucion ó una ley nacional, habrá llegado entonces el caso de que la Justicia Federal ejerza una jurisdiccion concurrente, ese será un asunto en que deban intervenir las dos justicias. Fíjese el señor Diputado que todos los casos de que habla el artículo 5º son de jurisdiccion federal segun la Constitucion Nacional; y, sin embargo, por esta ley damos intervencion á la Justicia de Provincia, concediéndole además la atribucion de conocer exclusivamente en primera instancia. Véase pues, cómo lejos de quitar á las Justicias de Provincia las atribuciones que les acuerda la Constitucion, se ha querido mas bien ampliar esas facultades, puesto que se les deja la primera instancia, y la Justicia Federal solo puede fallar en esas causas concurriendo con la Provincial en grado de apelacion ó enmienda. Si un litigante, por ejemplo, cree que la Justicia Provincial ha pronunciado una sentencia injusta violando la Constitucion ó las leyes nacionales, tiene derecho á apelar de aquella ante la Justicia Federal, que de ningún modo invade las atribuciones de la Justicia Provincial al conocer en ese caso en concurrencia con aquella.

El señor García: A estar por los principios que acaba de sentar el señor Diputado preopinante, veo que en todos los casos la Justicia Federal ejercerá una jurisdiccion concurrente con la de Provincia; porque las leyes españolas, que nos rigen hoy en materias de

derecho comun, deben ser consideradas como leyes nacionales desde que el Congreso lo ha declarado así; pero como aún éste ha de reglamentar despues esas mismas materias al sancionar los códigos, es consiguiente que ni entonces ni ahora pueda decirse que haya un solo caso en que la Justicia Federal no ejerza jurisdiccion concurrente, porque entonces no habria un solo asunto por trivial que él sea, en el cual no se interesen las leyes nacionales, y en ese caso la jurisdiccion de Provincia quedará extinguida, porque es absorbida por el Tribunal Federal desde que se sigan los principios del señor Diputado informante. A estar por esos principios, debírase suprimir la Justicia Provincial, y de esa manera se habrá llenado mejor el objeto que se propone la Comision en este artículo. El Poder Judicial, señor, como los otros poderes, no puede pasar más allá de las atribuciones que le acuerda la Constitucion sin falsear sus principios, y no sé como pudieran subsistir éstos, una vez que se acordase á ese poder una facultad tan amplia y absoluta.

El señor Ferreyra: Votaré en contra de este artículo por razones de entera contradiccion á las que ha expresado el señor Diputado preopinante. Como miembro de la Comision no he aceptado el artículo en la parte que se refiere á quitar á la Justicia Federal la concurrencia en la primera instancia de los asuntos Federales, haciéndolos de exclusiva competencia de la Justicia Provincial: concurrencia que la Constitucion ha establecido de una manera clara y precisa en dos artículos terminantes, que me permitirá recordar á la Honorable Cámara. El artículo 91 dice: que el Poder Judicial de la Confederacion será ejercido por una Corte Suprema de Justicia y por los demás Tribunales inferiores que estableciere el Congreso. El 97, designando las atribuciones de este poder, declara: que corresponde á la Corte Suprema y á los Tribunales inferiores de la Confederacion, el conocimiento y decision de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitucion, por las leyes de la Confederacion y por los tratados con las naciones extranjeras, etcétera. De suerte que estando tan expresamente consignado en dichos artículos que pertenecen al Poder Judicial de la Confederacion el conocimiento y decision de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitucion y por las leyes de la Confederacion, no puede privarse á la Justicia Federal en estos casos del conocimiento en primera instancia sin restringir el ejercicio de sus facultades constitucionales por una infraccion marcada de la Carta.

Mucho mas si se atiende á que segun lo prescripto en el artículo 105: *Las provinci*

no ejercen el Poder Delegado á la Confederacion; se ve que, ni por delegacion podria la Justicia Provincial ejercer las facultades conferidas á la Federal. De lo que se deduce, que habiendo la Carta dado de una manera indudable al Poder Judicial de la Confederacion el conocimiento y decision de las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitucion y por las leyes nacionales, es claro que el Congreso no puede siquiera delegar semejante facultad á la Justicia Provincial sino por un exceso de poder que no importaria otra cosa que una usurpacion de las atribuciones otorgadas al Poder Federal, hecha en favor de las Provincias. A mas de esto, la parte del artículo que rechazo trae otro grave inconveniente, cual es, el que restringiendo á la segunda instancia el conocimiento de la Justicia Federal en los casos en que debe conocer y decidir sin limitacion alguna por sus atribuciones constitucionales, se aumentan los costos y dilata la terminacion de los asuntos con una instancia mas; pues que en tales casos habria cuatro instancias que harian el trámite demasiado gravoso y complicado con mucho perjuicio del bien público, á quien tan directamente interesa la pronta terminacion de los litigios. Consultando estos bienes de inmensa trascendencia, la legislacion moderna de todos los paises cultos, se ha empeñado en reducir las instancias, simplificando en lo posible el procedimiento judicial.

Las razones que el señor Ministro y la mayoría de la Comision han expuesto en favor del artículo se reduce á que es conveniente dejar á la Justicia de Provincia la iniciativa en todas las causas en que la Constitucion la ha hecho concurrente con la Federal, ya porque ésta solo debia intervenir cuando fuese llamada á defender los principios constitucionales por via de enmienda ó apelacion, ya porque de esta manera se daba mas amplitud y ensanche al ejercicio de aquella. Se ha alegado tambien la conveniencia de que los jueces federales conozcan en segunda instancia de los asuntos de que conoce la Justicia Provincial, porque así tendrían los ciudadanos á la mano un medio expedito para defender sus derechos en los casos que fuesen atacados. Pero todas estas razones de conveniencia no destruyen la principal dificultad, la de que no solo contrariamos el espíritu de la Carta, sino sus expresas prescripciones y las ventajas que se alegan son de muy poco momento respecto del deber que nos impone la estricta observancia de un precepto constitucional. No sé, señores, por qué se quiere consultar ante todo la prontitud en el despacho de los asuntos, prefiriendo la celeridad á las garantías del acierto en los fallos judiciales, á manera de los practicones y embrollones

del foro que proceden sin la meditacion que demandan los mas serios negocios. No es el Juzgado unipersonal de Seccion donde los ciudadanos encontrarán mayor garantía del acierto, sino en los Tribunales mas altos de Distrito que crea esta ley. Y la conveniencia bien entendida de una buena y recta administracion de Justicia no consiste en la breve expedicion, sino en la precisa y acertada aplicacion de la ley. Por estas poderosas consideraciones es que las naciones mas cultas y pobladas, no pudiendo establecer en cada localidad los Tribunales colegiados competentes, han formado Distritos Judiciales. Así Chile, que bien puede tenerse en esta parte de América como modelo de una buena administracion, solo tiene cuatro Tribunales superiores, distribuidos en grandes distancias de doscientas á trescientas leguas. Del mismo modo sucedería entre nosotros y juzgo que no merecen tanta importancia los gastos que tendria que hacer un ciudadano de la Rioja para costearse á Córdoba, ó un tucumano que tuviese que ir á Salta; pues todos estos dispendios y molestias serian bien compensados con las mayores garantías ó probabilidades que ofrecen los Tribunales de Distrito para el acierto de sus resoluciones. Por todas estas razones he de votar en oposicion al artículo que se discute.

El señor Navarro (D. Ramon Gil): Yo pido al señor miembro informante se sirva resolver una duda que se me ocurre, para votar en favor del artículo, si como pienso se me satisface sobre este punto. Casi todas las Constituciones de Provincia, al tratar del Poder Judicial, tienen un artículo que á mi juicio está en completa oposicion al que discutimos. En la Constitucion de Catamarca, artículo 38, al hablar de los Tribunales de Justicia creados por ella dice: «Nadie sino ellos pueden decidir en actos de carácter contencioso; su potestad es exclusiva.» Bien pues; por el artículo se invade la soberanía local estableciendo para la Provincia mas Tribunales, mas instancias que las creadas por la Constitucion; en una palabra, la Justicia Federal vá á absorber la Justicia de Provincia.

Como he dicho antes, este artículo que leo en la Constitucion de Catamarca, lo encuentro tambien consignado en la Constitucion de Mendoza, de La Rioja, San Luis y otras, y cuando el Congreso ha aprobado estas Constituciones, despues de revisarlas, segun el artículo 5° de la Carta Nacional, ha dejado en pie la soberanía no delegada á la Nacion, la ha garantido y reconocido de nuevo, si así puede decirse, despues de haberla establecido la ley fundamental.

Desearía saber, pues, del miembro informante ó del señor Ministro, en qué condicion

queda el Poder Judicial de Provincia una vez que, contra lo establecido en las constituciones locales, se dé por esta ley un Tribunal ó una instancia de más á cada Provincia para tener cuatro, por ejemplo, en vez de tres. Recuerdo, á este propósito, que la Provincia de Catamarca fué invitada por otras del Norte, á celebrar un tratado interprovincial para el establecimiento de un Tribunal Superior que juzgase en última instancia y que la Legislatura no accedió á formar ese tratado, fundándose, entre otras razones poderosas, en que la Constitución Provincial en el artículo que he citado, limitaba el Poder Judicial á los únicos poderes establecidos por ella. Quisiera, pues, oír las explicaciones que el señor miembro informante pueda dar á este respecto.

El señor Funes: El señor Diputado que me ha precedido ha citado algunos artículos de Constituciones Provinciales como argumento en contra del que se discute. No, señor, la Constitución Provincial es natural que diga cómo se ha de administrar la justicia puramente local, del mismo modo que determina las atribuciones de los Poderes Legislativo y Ejecutivo Provinciales. Pero no debe suponerse que una Constitución local pueda impedir el ejercicio de la Justicia Federal en esa Provincia; porque solo puede estatuir en asuntos de su jurisdicción. Cuando habla, pues, de los Tribunales debe entenderse que se refiere á los de la Provincia.

El señor Diputado debe recordar, además, el artículo 91 de la Constitución y el artículo 1º de esta ley, sancionado ya, y que dice así: «La Justicia Federal será ejercida en todo el Territorio de la Confederación por la Suprema Corte de Justicia y por los Tribunales inferiores que establece esta ley, y los que en adelante estableciera el Congreso». Ya no sé si esos Tribunales inferiores, en el concepto del señor Diputado, solo deben establecerse en la Capital; pero no puedo creer que á nadie se le ocurra que no deben establecerse en todo el territorio de la Confederación, como lo previene el artículo 1º citado. Lo que prueba, señor, que la prescripción de algunas Constituciones Provinciales, que el señor Diputado ha recordado, no se oponen en manera alguna al artículo que se discute; puesto que ninguna Provincia podría pretender legislar sobre Justicia Federal.

Respecto á los argumentos aducidos por otro señor Diputado, en contra del artículo que se discute, sobre la concurrencia de la Justicia Federal en los asuntos que corresponden en 1ª instancia á los Tribunales de Provincia, haré notar solamente, que el señor Diputado, al hacer su argumento no ve más que leyes nacionales; pero debe tener presente que hay otras que son puramente provinciales,

como son las de impuestos municipales, por ejemplo.

Supóngase que se entable una demanda sobre ese impuesto ó cualquiera otro de esta naturaleza ante un Juzgado de Provincia y que el Juez mande cumplir la ley; pero si uno de los litigantes declarase que esa ley estaba en pugna con la Constitución, entonces la Justicia Federal le ofrece su protección concurriendo con la de Provincia para decidir el caso en última instancia. Véase, pues, el como la Justicia Federal puede y debe concurrir con la de Provincia cuando alguno se vea oprimido en los derechos que la Constitución le acuerda.

El señor Ministro de Justicia: Se han aducido en contra de este artículo dos argumentos diametralmente opuestos entre sí. El primero se reduce á probar que las Justicias Provinciales deben ejercer libremente, es decir, sin intervención de ningún género por parte de la Justicia Federal, la facultad de aplicar las leyes en las causas de su competencia. Si se hablase de las leyes puramente locales, no habría duda, señor, porque nadie niega que en esos casos los Tribunales Provinciales deben decidir exclusivamente.

Pero no sucede lo mismo, cuando se trata de una ley nacional; porque sería inútil la creación de los Tribunales Federales, si éstos no tuvieran la facultad de aplicarlas en todos los casos particulares que ocurran. Teniendo, pues, la Nación el derecho de crear leyes, tiene también el derecho de nombrar jueces que las apliquen. Por consiguiente, la jurisdicción concurrente de la Justicia Federal con la de Provincia nace del artículo 31 de la Constitución, que dice así:

«Esta Constitución y las leyes de la Confederación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras, son la ley suprema de la Nación; y las autoridades de cada Provincia están obligadas á conformarse á ella, no obstante cualquiera disposición en contrario que contengan las leyes ó Constituciones Provinciales». Las autoridades de provincia están pues, obligadas á la aplicación de las leyes nacionales, además de las que son puramente locales. Pero algún señor Diputado ha dicho que antes de aceptarla concurrencia de la Justicia Federal en los asuntos que no pertenecen originariamente á su jurisdicción, estaría más bien porque se suprimiese la Justicia Provincial. Me causa extrañeza, señor, que se traiga un argumento semejante, cuando la misma Constitución exige en su artículo 5º que cada Provincia dicte para sí una Constitución de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Nacional, *que administre su administración de Justicia, etc.*, y que bajo estas condiciones el Gobierno Nacional garante á

cada Provincia el goce y ejercicio de sus instituciones. Pero el señor Diputado dice que aceptaría la supresion de las Justicias Provinciales antes que la concurrencia de ellas con la Justicia Federal. Pero, señor, no sé qué tendencia es esta de saltar á las prescripciones de la Constitucion!

El señor García: He dicho que admitir la concurrencia de la Justicia Federal en todos los casos que se interesen leyes nacionales relativas al derecho comun, equivaldría á suprimir las Justicias de Provincia.

El señor Ministro, continuó: Las provincias pues, deben tener su Justicia propia con arreglo á la Constitucion Nacional; pero la Nacion no puede abandonar los casos de su ley á la aplicacion que hagan de ella los Tribunales Provinciales sin conservar al menos el derecho de enmienda.

Otro señor Diputado ha dicho que los casos en que el artículo establece la concurrencia de la Justicia Federal con la de Provincia, están atribuidos á la primera por el artículo 105 de la Constitucion y que el Congreso no puede conceder á las Justicias provinciales el conocimiento de los casos en que debe entender la Federal. Para contestar á este argumento me bastará recordar que el artículo 98 dice que á excepcion de los asuntos concernientes á embajadores, ministros y cónsules extranjeros, en los que alguna Provincia fuese parte, y en la decision de los conflictos entre los poderes públicos de una misma Provincia en que ejerce una jurisdiccion originaria, en los demás casos que se expresan en el artículo anterior la ejercerá por apelacion *segun las reglas y excepciones que prescriba el Congreso*. Por consiguiente, al establecer el Congreso que la Justicia Federal juzgue en grado de apelacion ó enmienda en todos los puntos regidos por la Constitucion que no están exceptuados en el artículo citado, únicos en que aquella tiene una jurisdiccion originaria, no invade las atribuciones de la Justicia Provincial, ni restringe las facultades de la Federal. Pero como no es posible que la aplicacion de las leyes nacionales se libre al juicio exclusivo de la Justicia de Provincia en los casos de su jurisdiccion, no hay otro modo posible que el que se propone en este artículo para consultar el ejercicio de las dos Justicias que tenemos que establecer.

Tampoco pueden apropiarse á nuestro caso los ejemplos de otras naciones, porque siendo en ellas una la soberanía, es uno el Poder Legislativo, uno el Ejecutivo y uno tambien el Judicial. Pero nosotros hemos respetado las soberanías de Provincia establecidas durante la guerra civil: hemos declarado al constituirnos que las provincias son soberanas; que cada una de ellas debe tener tres poderes soberanos é independientes entre sí, no obstante

que habrá un Gobierno Nacional compuesto de tres poderes soberanos tambien; hemos dicho que las Provincias tendrán un gobernador, no obstante que habrá un Presidente de la República; que tendrán una Legislatura, sin embargo que habrá un Congreso Nacional; y que tendrán, en fin, sus Tribunales de Justicia, aunque tambien los haya nacionales. Debemos aceptar en cuanto al Poder Judicial las mismas inflexiones que la Constitucion ha prescripto con respecto á los Poderes Legislativo y Ejecutivo.

Con respecto al Poder Judicial hay uno en las Provincias establecido con arreglo á la Constitucion local, que debe aplicar en las primeras instancias la ley nacional en los casos de su jurisdiccion, pero es preciso distinguir los grados; y es tanto más justo que se dejen las primeras instancias á la Justicia Provincial, cuanto que parece que la Justicia Federal no tiene derecho á intervenir sino cuando las leyes nacionales ó la Constitucion no han encontrado en las Justicias de Provincia el apoyo y respeto que la Constitucion les impone en el artículo 31. Por consiguiente, solo en este caso (en que no haga justicia un Tribunal de Provincia) la Justicia Federal tiene obligacion de enmendar el yerro que aquella ha cometido cuando es requerida al efecto, ejerciendo una jurisdiccion concurrente con la de Provincia, sin otra diferencia que la Federal conoce en grado de apelacion ó enmienda del fallo de la otra, porque es superior.

El señor Ferreyra: He pedido la palabra para explicar mi pensamiento, porque en mi concepto no ha sido bien comprendido por el señor Ministro.

Parece que el señor Ministro ha concebido que mis objeciones se dirijen á demostrar que en este artículo se hace poco acatamiento á la Justicia Federal ó se viola la Carta en la falsa suposicion de que no están determinadas en ésta las diferentes instancias en que aquella debe conocer, y para rebatirlas se ha empeñado en probar principalmente con el texto del artículo 98 que no se infrinje en manera alguna la Constitucion, porque en el artículo que se discute no se aumentan las atribuciones de la Justicia Provincial, ni disminuyen las facultades ó jurisdiccion de la Federal, sino que se concede á cada una lo mismo que les ha acordado la Carta; pues que segun el artículo citado se deja al Congreso la facultad de determinar los casos en que la Corte Suprema ejercerá su jurisdiccion por apelacion, y que esto es lo mismo que contiene la disposicion del artículo.

Pero, señores, son estos mismos principios un juicio, y por esta consideracion las razones aducidas por el señor Ministro producen

más bien un argumento en contra del artículo que se discute, puesto que tienden á probar que las instancias en que deben conocer los Tribunales Federales están establecidas por la misma Carta, y siendo esto así, no pueden ser restringidas por ninguna ley reglamentaria. La cuestion se reduce entonces á determinar la esfera que les ha sido designada para ejercer su jurisdiccion. ¿Y cuál es ésta, señor? Claro es que aquella que le ha trazado el artículo 97, determinando tan prolijamente todos los casos que pertenecen á la Jurisdiccion de la Justicia Federal, entre los cuales se hallan ciertamente comprendidas las causas que versan sobre puntos regidos por la Constitucion y leyes nacionales; de los cuales, como representantes de la Nacion, nosotros no podemos suprimir ni disminuir uno solo en el ejercicio de la Justicia Federal, por lo mismo que esas instancias están creadas y establecidas por la Constitucion. Este es tambien un deber que nos impone el artículo 28, que dice: que los reglamentos dictados por el Congreso deben ser de tal manera que no alteren los principios consignados en la Carta.

Ahora bien: en el artículo que se discute se restringe la jurisdiccion de la Justicia Federal, porque se la priva del conocimiento en primera instancia de las causas que por el artículo 97 son de su competencia, y se hacen de la atribucion exclusiva de los Tribunales de Provincia, limitando la concurrencia de aquella á solo la segunda instancia por apelacion ó enmienda; cuando nuestro primer deber al sancionar esta ley es dar á la Justicia Federal toda la amplitud de jurisdiccion que le acuerda la Constitucion, sin que nos sea permitido menoscabarla para ensanchar la reservada á las provincias. Por otra parte, las excepciones de que habla el artículo 98, citado por el señor Ministro, se refieren únicamente á las limitaciones de los casos de apelacion á la Corte Suprema que puede establecer el Congreso; pero de ningun modo puede de aquí deducirse la facultad para quitar á la Justicia Federal el conocimiento en primera instancia de las causas federales, coartando su jurisdiccion constitucional.

Lo que quiero es establecer entre las dos justicias, Nacional y Provincial, esa armonía en que ambas deben marchar, ejerciendo sus funciones dentro de la esfera que les ha trazado la Carta, sin estorbarse jamás, y sí, por el contrario, prestándose reciproco apoyo. Esto es lo que ha querido tambien la Constitucion y que no llegará á ser una realidad si las leyes orgánicas como la presente, no se ajustan estrictamente á sus prescripciones.

Yo convengo en que la Justicia Provincial debe conocer juntamente con la Federal en las causas que versen sobre puntos regidos

por la Constitucion y leyes nacionales, porque pudiendo interpretarse de un modo muy extenso el sentido de la frase *regidos por la Constitucion*, si se les privase de este conocimiento, no quedarían asuntos en que pudieran ejercitarse los Tribunales de Provincia. Siento la necesidad de la concurrencia, pero la quisiera ver establecida del modo y con la extension que le corresponde en los casos que la admite la Constitucion, es decir, en los asuntos regidos por ésta y las leyes nacionales, que son las únicos en que ambas Justicias deben conocer á prevencion en todas sus instancias, conforme á nuestro sistema constitucional.

Por otra parte ¿cuáles son, señor, los inconvenientes que se oponen para que demos cumplimiento á lo dispuesto por la Carta? Hasta este momento al menos, no se ha objetado ninguno que pueda considerarse como insuperable. Pongámonos entonces á la altura de los principios consignados en esa Carta, y no temamos un mal éxito en consagrar una garantía más, y redoblar la seguridad para defender los preciosos derechos de los ciudadanos con la abundancia de los jueces que diriman sus discordias. Se ha dicho que si se creasen juzgados federales de primera instancia, se creerían quizá desairados los de las Provincias; pero, señor, lo digo con franqueza, yo no abrigo semejante temor, porque no puedo concebir una vanidad tan injustificable, desde que se deja á la Justicia de Provincia la misma esfera de accion en que la Constitucion la ha colocado al hacerla concurrente con la Federal en ciertos y determinados casos solamente. Si la Constitucion, pues, ha creado estas dos especies de Justicia, si á cada una de ellas ha dado atribuciones señaladas, ¿de dónde sacaré, señor, el Congreso la facultad de hacerse superior á la ley fundamental, para deducir la jurisdiccion de los Tribunales Federales, quitándoles el conocimiento que les compete en la primera instancia?

Esta restriccion contraría manifestamente las disposiciones terminantes de la Carta, que establecen la Justicia Federal en primera y segunda instancia, sin reducirla en ningun caso á solo la segunda; por lo que votaré, señor, en contra del artículo que se discute.

El señor Ministro de Justicia: Empezaré por expresar que lo que he dicho anteriormente ha sido en contestacion á los argumentos aducidos por los señores García y Navarro, porque el señor Diputado preopinante ha creído equivocadamente que me referia á él. No, señor. Viniendo de lleno á los principios que acaba de sentar, yo le concedo de buen grado que el Congreso debe hacer lo que dice la Carta. Pero el señor Diputado debe observar que lo único que aquella ha

establecido es la jurisdiccion originaria de la Justicia Federal, y que en los demás casos la Corte Suprema ejercerá su jurisdiccion por apelacion, segun las reglas y excepciones que prescriba el Congreso; tal es la prescripcion literal del artículo 98. Bien pues, por el artículo 64, atribucion 17, tiene además el Congreso la facultad de establecer en el territorio de la Confederacion tribunales inferiores que conozcan en los casos que no sean de la jurisdiccion originaria y exclusiva de la Suprema Corte. Por consiguiente, señor; desde que el Congreso deje sanas y salvas las atribuciones originales de ésta, en lo demás que concierne á los Tribunales inferiores puede establecer lo que crea mas conveniente con toda libertad, siempre que no se oponga á lo que prescribe la Constitucion. Podria tambien el Congreso evitar esa jurisdiccion concurrente como se dice que se ha hecho en Norte-América; pero esto no es posible todavía, aunque puede ser que llegemos á ese término alguna vez. Digo, pues, que hoy no aconsejaria al Congreso que lo haga por conveniencia, señor, porque casi todos los asuntos contenciosos podrian ser pleitos regidos por alguna declaracion constitucional, por alguna ley de la Nacion, y entonces sustraídos á la Justicia de Provincia, como incompetentes para decidirlos, podrian acaso suponerse aquellas despojadas de sus atribuciones judiciales. Por esto se dice en el artículo 98 de la Constitucion que la Suprema Corte solo ejercerá su jurisdiccion originaria y exclusiva en los casos de Ministros Extranjeros ó en que una Provincia fuese parte. Es cierto que el Congreso puede multiplicar esos casos de jurisdiccion originaria para los Tribunales inferiores porque la Carta le acuerda facultad para ello; pero está en su prudencia establecer que los Tribunales Federales solo conocerán exclusiva y originariamente en los casos expresados en los artículos 97 y 98 de la Constitucion, segun las reglas que el Congreso haya establecido para el ejercicio de sus atribuciones. Véase pues, que es completamente infundado el temor de que el Congreso invada las atribuciones del Poder Judicial, desde que por la Carta tiene el derecho de reglamentar el ejercicio de aquellas.

Siguiendo mi propósito de que debe dejarse participacion á las Justicias de Provincia en todos los asuntos en que no debe conocer originariamente la Federal, diré que aquellas tienen medios mas eficaces para crear los procesos, mas á mano la fuerza pública que necesitan en todos los casos; por cuya razon es mucho mas activa la Justicia local de Provincia. Debemos, pues, concederle la iniciativa en todos aquellos casos en que no está interesada directamente la Nacion, ó en que la

Justicia Federal no debe conocer originariamente. Creo, pues, que en el artículo que se discute está perfectamente determinada la concurrencia de la Justicia Provincial.

El señor García: El señor Ministro ha tomado en consideracion un concepto vertido por mí y con él quiere probar que sostengo el principio unitario. Por el contrario, señor, considero centralizador ó como se ha dicho, unitario, el sistema de administracion de Justicia que se propone, esa es una de las principales razones que tengo para votar en contra del artículo que se discute, porque queda completamente absorbida la Justicia de Provincia. El señor Ministro ha citado en contestacion á esto la atribucion 17 del Congreso, que le acuerda el derecho de establecer Tribunales inferiores á la Suprema Corte de Justicia. Es indudable, señor, que el Congreso tiene esa atribucion; pero no es menos cierto que las resoluciones de aquél deben estar siempre en perfecto acuerdo con los principios mismos.

El señor Diputado informante ha descendido á casos particulares para demostrar la necesidad de la concurrencia de la Justicia Federal; ha supuesto el caso de que una Legislatura de Provincia dictase una ley inconstitucional, y deduce que en ese caso es indispensable la intervencion de la Justicia Federal.

No veo yo esa necesidad, señor, porque el artículo 31 de la Constitucion Nacional dice terminantemente, «que esta Constitucion, las leyes de la Confederacion, y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nacion; y las autoridades de cada Provincia están obligadas á conformarse á ella, no obstante cualquiera disposicion en contrario que contengan las leyes ó Constituciones Provinciales.» Por consiguiente, aunque en un litigio ó caso ocurrente se haga referencia á una ley provincial que esté en pugna con la Constitucion, los Jueces deben saber muy bien que han de aplicar ésta antes que aquella. Entonces, señor, á qué dar á un litigante la libertad de que pueda apelar del Tribunal mas alto de la Provincia ante la Justicia Federal en todos los casos que puedan ocurrir, cuando los Jueces de Provincia pueden aplicar tan bien como los Federales la Constitucion y las leyes? Yo no veo para esto una razon y á menos que se conceda á los Jueces Federales un privilegio de inteligencia, no se debe suponer lo contrario. Desearia, pues, que el señor Ministro y la Comision descendiesen al verdadero punto de vista en que he presentado ya esta cuestion, para que en su vista defieran de las razones aducidas á la supresion de la segunda parte del artículo que se discute.

El señor Alvear: La oposicion á este ar-

título ha tomado una fisonomía verdaderamente extraña. Uno de los opositores ha invocado en su favor la soberanía de las Provincias; otro pretende que la Justicia Federal quedará despojada de sus atribuciones si se acuerda á la de Provincia el conocimiento en las primeras instancias de los asuntos que no pertenecen originariamente á la Justicia Federal. Creo que el señor Ministro ha probado no solo la constitucionalidad del artículo en discusion, sino que en la concurrencia acordada á la Justicia Federal es lo que constituye su mérito; porque no solo se dejan á la soberanía provincial las atribuciones que le competen, es decir, el conocimiento en las primeras instancias, sino que se permite á la Justicia Federal llenar el grande objeto que la Constitucion se propone, de extender su poder y proteccion á todos los ángulos de la República para proteger los derechos del ciudadano. Porque esto, es señor, lo que encierra el espíritu de este artículo, que además deja toda la libertad posible á ambos poderes, y tiende al mismo tiempo á ensanchar la esfera en que pueden los habitantes acudir cuando se atacan sus derechos.

En cuanto á las teorías generales que se han desarrollado en contra de este artículo sobre los poderes provinciales, lejos de ser perjudicial esta atribucion á las soberanías de Provincia, ofrece una garantía mas de orden y libertad en aquellas con los Tribunales Federales.

Pero hay otra razon mas de alta importancia política encerrada en este sistema de administracion de Justicia. la de ligar y encarnar los intereses del pueblo con los grandes intereses del Gobierno Nacional, porque se pone en contacto á los Poderes Nacionales con los intereses individuales: es obligar á los pueblos y á los individuos á tener siempre presente al Gobierno Nacional como á un ser protector y de la esfera en que ellos se encuentran. Tiende, pues, este proyecto á vincular al Gobierno Nacional con los intereses individuales; porque esto ahogará para siempre las tendencias al aislamiento. En este sentido, pues, votaré en favor del proyecto no solo en este artículo sino en todos los otros, porque creo que llena todas las exigencias, tanto generales como particulares. He dicho.

El señor Araoz hizo mocion para que se diese el punto por suficientemente discutido. Apoyada esta mocion se votó y fué aprobada.

Los señores Warcalde, Quesada y Navarro, pidieron que constase en el acta que votarían en oposicion al artículo y que por falta de tiempo no habian podido expresar las razones en que se fundaba su voto.

Despues de esto se puso á votacion el artículo 5º y resultó aprobado por mayoría.

Inmediatamente se levantó la sesion á las cuatro y cuarto de la tarde.

M. Luque.

Benjamin Igarzabal,
Secretario.